

Sr. Presidente, especialmente en el último año asistimos a un duro debate sobre la estructura institucional del Estado Español. Se centra en si existen varias naciones dentro de él o sólo una. El debate se produjo con motivo de la elaboración de nuevos Estatutos de Autonomía, de forma muy viva con el salido del Parlament de Catalunya. Por vez primera, en veinte años, tenemos ocasión de analizar y aclarar, en el terreno ideológico y político, lo que es una nación, y lo que es un Estado. También argumentar los derechos al autogobierno, su fundamentación política y no sólo administrativa. En definitiva, hablamos sobre la posibilidad de adaptar el Estado Español a su carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüe.

Sin embargo, no es fácil clarificar, en vez de confundir, y dialogar y acordar, en vez de amenazar, intimidar e imponer, si tenemos en cuenta la reacción visceral, intolerante y prepotente –cuase imperial-, que emana, todavía hoy, de la estructura de poder en la que se fundamenta eso que llaman “indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Dicho de otra manera, del carácter centralista del Estado Español, pese a las apariencias.

Topamos con el poder mediático, el poder económico, el poder judicial, el militar, el institucional, el religioso, el ideológico-cultural académico, que tiene como centro Madrid. En cierta manera, recuerda la situación vivida en los tiempos de la Segunda República a raíz de la presentación y aprobación del Estatuto de Catalunya en las Cortes. Como explicaba Castelao: “É forzoso reconecer que se alporizaron os odios –vellos e novos- contra Catalunya e os primeiros gobernantes da República, porque o Estatuto Catalán aparecía como un privilexio irritante, concedido por medo ás rexións separatistas”. Diríamos hoy que el odio se agita desde la tesis de que se rompe España y desde la negación absoluta e inquisitorial de la diversidad nacional y de los derechos que le son inherentes. Se pasó de atacar un sistema de financiación que pretendía territorializar todos los tributos, contar con una Agencia Tributaria propia, la participación pactada en los gastos del Estado y en un fondo de solidaridad, es decir, una verdadera autonomía fiscal y financiera, acusándolo de egoísta e insolidario, a concentrar toda la artillería contra la consideración de Catalunya como nación, y de su lengua, como idioma prioritario y propio del país, con el mismo estatus legal que el castellano.

En estas estamos: en la negación de realidades empíricas incuestionables y de derechos humanos fundamentales. Los poderes que se presentan como pilares de la unidad de España no renuncian efectivamente a mandar en ella desde Madrid. No conciben ni soportan un reparto plural, compartido del poder, de la soberanía política. No admiten siquiera la consideración de que las instituciones de autogobierno actuales sean la expresión de la voluntad

política de las sociedades que representan, y que haya que respetarlas y tenerlas en cuenta, concepción en la que Usted se mueve en principio.

Como representante del BNG, quiero recordar qué era para Castelao lo más viejo, más negro y más podrido de la España centralista: el militarismo, que se considera siempre herido en sus sentimientos patrióticos; el clericalismo, que se considera herido en sus sentimientos religiosos; y el semi-feudalismo o cierto tipo de capitalismo que se considera herido en sus intereses. Nosotros podríamos añadir la prepotencia corporativista y antidemocrática de una parte del poder judicial. Resulta llamativo el paralelismo entre el esfuerzo de democratización del Estado y su adaptación al pluralismo y la diversidad que lo sustenta. Esta es una enseñanza incontestable de la experiencia política que estamos viviendo. Va siendo hora de que se asuma un Estado Español realmente plurinacional, realmente democrático, basado en la relación entre iguales. Es éste el modelo de Estado que no se quiere aceptar por aquellos que nos hablan continuamente de unidad, igualdad y solidaridad, mientras los resultados de su política son el sometimiento, la desigualdad y la amenaza.

Ciertamente, Sr. Presidente, parece que, frente a una concepción autonomista, concebida como gestión administrativa descentralizada, muchas veces encubridora de un tradicional y furibundo centralismo, no se levanta, a nivel estatal y con la misma relevancia, un modelo de Estado que opte por la plurinacionalidad, el autogobierno de las naciones y su relación igual, sin miedo a compartir el poder que se fundamente en su soberanía. Entre una Constitución Española agitada de forma sacralizada, como texto inmutable, y sus lecturas posibilistas, para justificar concesiones limitadas o puntuales, es difícil que se abran paso cambios cualitativos, aquellos que conducirían a un verdadero Estado federal o confederal. Se actúa con criterios de coyuntura, incluso cuando hay el deseo de integrar y no excluir como es su caso. Así es muy difícil construir sobre bases de igualdad. Incluso existe el peligro, Sr. Presidente, de que su discurso de la diversidad, el pluralismo y el diálogo, contrasten o palidezcan frente a la práctica de la centralización de competencias a través de la legislación y las normas del Estado (proyectos de ley de régimen local, de discapacidad, de Radio Televisión Española, la política de vivienda, intentos de reforma de la ley electoral, competencias sobre la formación continua, ...).

Le decimos todo esto porque reconocemos su empeño en comprender el carácter plurinacional del Estado, e incluso su disposición a que las lenguas que no son el castellano tengan un verdadero estatus de oficialidad en sus territorios. Empeño y disposición que está muy condicionada por el poder dominante y por la visión, que del conjunto del Estado y del papel

que cada nación juega dentro de él, tiene el principal partido de la oposición, y una buena parte de la fuerza política que sustenta su gobierno. De esta forma, el actual debate y su plasmación reivindicativa se encuentran con límites que no deberían imposibilitar avances reales para todos y, en concreto, para Galiza. Su política de integración y diálogo para lograr la paz en Euskadi no puede fracasar por presión de poderes y sectores inmovilistas e intransigentes.

Recientemente habló usted del valor estratégico de Andalucía para España, coincidiendo con el Sr. Rajoy en tal apreciación. Constataron su importancia para la vertebración institucional del Estado. Galiza es una nación diferente, con su lengua y su trayectoria histórico-cultural específica, con sus problemas socio-económicos peculiares. Para el Estado Español es marginal, siempre sometida a estrategias que no la benefician. Por esto mismo, Galiza es objetivamente la más interesada en cambiar la estructura del Estado, la concepción de unidad, igualdad y solidaridad en que se fundamenta. Tenemos grandes dificultades para avanzar a causa de muchas políticas del Estado y de la UE. Comprobémoslo con algunos ejemplos y algunas reivindicaciones.

Desde 1995 hicimos un gran esfuerzo reivindicativo a favor de la modernización de la red ferroviaria de Galiza. Conseguimos así aparecer en el mapa de los planes del gobierno español en el 2000. Desde entonces algo hemos avanzado en la práctica, pero distamos mucho de recibir un trato no discriminatorio. Todavía domina la propaganda frente a los hechos. La lentitud caracteriza la ejecución de obras. No hay una planificación creíble. El Eixo Atlántico A Coruña-Vigo, iniciado en 2000, no estará a este paso hasta 2010 (10 años para un recorrido de 160 kilómetros, un corredor de alta rentabilidad económica, colapsado por el tráfico). Por supuesto, A Coruña-Ferrol y Vigo-frontera portuguesa, del mismo Eixo, no salen de la fase pendiente de declaración de impacto ambiental y de estudio informativo, respectivamente. Se desatascó, hace exactamente un mes, gracias a la presión política, el itinerario Ourense-Lubián, pendiente de la declaración de impacto ambiental. Pero no hay una planificación de inversiones plurianuales, ni horizontes temporales creíbles para estos corredores, que son prioritarios. Necesitamos veracidad, compromiso y responsabilidad.

Los presupuestos para 2006 apoyados por el BNG, después de introducir algunas modificaciones, significaron un avance. Por primera vez, se nos destinó el 8% del total estatal para infraestructuras terrestres (600 millones de euros para el ferrocarril). Sospechamos que no se invertirá todo lo presupuestado. Las distintas iniciativas parlamentarias aprobadas, incluso

en este mismo Debate del año pasado, para mejorar los “servicios regionales” y de largo recorrido de Galiza, se incumplen sistemáticamente.

El nuevo gobierno de Galiza está empeñado en la restauración de nuestra base agraria, en una política forestal planificada, que no sea monocultivo de eucalipto para celulosas. No renuncia a contar con un grupo lácteo propio, en consonancia con la importancia del sector (más de un tercio de la producción total del Estado). Necesita colaboración, en relación con este sector estratégico para Galiza, no discriminación y rutina por parte del Gobierno central. Nos desmoraliza ver que, en un momento de gran demanda mundial de construcción de buques, un astillero de grandes dimensiones como Navantia-Fene sigue un proceso de desmantelamiento inexorable, sin carga de trabajo propia, reducido a una subcontrata de bloques para las fragatas F100 de Navantia-Ferrol, excluido de la construcción civil, sin horizonte clarificado alguno. Se da la paradoja sarcástica de que un astillero privado de la Ría de Vigo, por falta de capacidad en sus gradas, subcontrata la construcción de cascos de quimiqueros a Navantia para hacerlos no en Fene, excluido por una prohibición política, sino en Puerto Real, a considerable distancia. Y es dinero de la Xunta el que avala los contratos. Está clara la opción estratégica del gobierno.

Nuestra lengua necesita otro estatus de oficialidad, que sitúe sus derechos al mismo nivel que el castellano. Sin entrar a valorar los deberes, carencias y dejaciones internas, está claro que necesitamos otro comportamiento de la administración central. Dificultades para casarse en gallego, para galleguizar el nombre, para restaurar la forma original de los apellidos, para la documentación con destino al registro de la propiedad o mercantil, para desarrollar las causas y procesos judiciales. No es de recibo, que después de veinte años, la Administración General del Estado todavía reproduzca topónimos de Galiza deturpados, deformados, no los oficiales y originarios. Que se desprecie o dificulte el uso del gallego para todas las actividades en empresas públicas como Navantia en nuestro territorio. Que la Delegación del Gobierno se apresure a llevar a los tribunales normativas del uso del gallego en las corporaciones locales, acordes con la legalidad vigente. Que el gallego, pese a reiteradas promesas positivas, siga excluido de la página web de la Agencia Tributaria. Es un derecho humano elemental. No queremos seguir viviendo como extranjeros en el propio país.

La ficción de la igualdad que nos predicán los defensores del statu quo se desmiente en el caso de Galiza fácilmente:

- a) La remuneración bruta gallega (2004) está a una distancia de 9,3 puntos de la declarada a nivel estatal.

- b) Quinquenio 2000-2004 emigraron al resto de España 85.850 gallegos (jóvenes, muchas veces con alta y buena formación). Entre 2001 y 2005 perdimos 29.272 habitantes, mientras el Estado Español ganaba 2.991.688 habitantes.
- c) En 1900 representábamos el 10,64 % de la población del Estado, y en 2005, el 6.25%. Madrid pasó del 4,16 % al 13,52%, en el mismo periodo (un macrocentro de riqueza e inversiones).
- d) Pasamos de representar el 6,30 % del PIB español a representar el 5,6% en 1994 y el 5,08% en 2005.

Necesitamos políticas de equilibrio territorial reales, no declarativas.

El mercado de trabajo refleja que Galiza significaba en 1980 el 8,8% de los activos del Estado, el 9,3% de los ocupados y el 4% de los parados. En el 2006, representa el 5,9% de los activos y de los ocupados, pero el 6,6% de los parados. Una evolución contradictoria con la del Estado. La realidad es que el diseño político y la forma de funcionamiento de la economía provocan fenómenos demostrativos de que seguimos en un Estado centralista. Según el informe de la Agencia Tributaria (2003), el 47,5% de la recaudación tributaria se atribuye a Madrid. Sin embargo, su PIB significaba sólo el 17,4%. Ya se ve que ser capital del Estado tiene muchas ventajas, no sólo un elevadísimo aparato político sino la localización de las sedes de importantes empresas cuyos centros productivos operan en otras partes del Estado, y concretamente en Galiza. Por esto el modelo de financiación es clave para instaurar la transparencia, la auto-responsabilidad y la relación entre iguales. El nuevo modelo que se nos quiere aplicar es continuista con el anterior del Partido Popular.

Su gobierno está más abierto a debatir algunas cuestiones de tipo socio-laboral. Pero falta decisión para enfrentar problemáticas, derivadas de incuria e irresponsabilidad de la administración pública y de las empresas. Ahí están los afectados por la asbestosis, por silicosis (canteras de granito), o a aquellos que realizan actividades peligrosas (bomberos). Hay que asumir claramente las indemnizaciones, las jubilaciones anticipadas, los coeficientes reductores, los cuidados médicos adecuados y las oportunas declaraciones de enfermedad profesional, en cada caso. La inspección de trabajo necesita un marco legal más descentralizado y prescriptivo para garantizar seguridad y salud en el trabajo. Falta mucho por andar en el caso de los siniestros en el mar. Dan la sensación de fatalidad, de destino trágico de los hombres del mar. Pero la verdad es que se conjuga un inapropiado funcionamiento del salvamento marítimo, del sistema mundial de socorro, con las deficiencias técnicas de los barcos, la falta de formación

de las tripulaciones, la precariedad y la falta de auxilio en el mar (O Bahía, Siempre Casina, Dinish, entre otros...).

Galiza, Sr. Presidente, no está ajena a la dialéctica política mundial. Muchos pueblos aspiran a cambiar las relaciones de poder y de dominio que padecen. El BNG aplaudió su decisión de retirar las tropas de Irak, porque formaban parte de un ejército de ocupación, agresor y anulador de la soberanía del pueblo iraquí y de su derecho a un futuro libre. Vemos con preocupación que se envíen progresivamente más tropas a Afganistán, presentándolo como labor humanitaria, cuando objetivamente se incardina en los diseños imperiales de los EE.UU (control del epicentro petrolífero del mundo y e intimidación a otras potencias). Celebramos que no haya caído en una posición beligerante con Bolivia, Venezuela o Cuba. Mejor optar por el diálogo y por el respeto de decisiones políticas soberanas.

En este mundo complejo y difícil, el BNG considera, Sr. Presidente, que se necesita un avance cualitativo en la estructura institucional del Estado español, más justicia social y mayor sensibilidad, atención y diálogo entre iguales con Galiza.